

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 1º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-2900-2021
CARATULADO : BRIONES/FISCO DE CHILE

Santiago, veintidós de Abril de dos mil veintidós

VISTO:

A folio 1, con fecha 23 de marzo de 2021, comparece **Cynthia Alejandra Martinic Jara**, abogada, domiciliada en Estado 215, oficina 806, Santiago, comuna de Santiago, en representación judicial de **ALBERTO RAMÓN BRIONES GUERRERO**, pensionado, C.I. N° 5.239.260-8, con domicilio en Luis de Jesús 5-66, Quito, Ecuador, deduciendo demanda en juicio ordinario de indemnización de daños y perjuicios, en contra del **FISCO DE CHILE**, representado legalmente por **Juan Antonio Peribonio Poduje**, en su calidad de Presidente del **Consejo de Defensa del Estado**, ambos domiciliados en calle Agustinas N°1687, comuna de Santiago, solicitando que: 1) se condene al Estado de Chile a pagar al demandante a título de indemnización de perjuicios por el daño moral sufrido causado por los crímenes perpetrados en su



Foja: 1

contra, la suma de \$150.000.000 (ciento cincuenta millones de pesos), más reajustes de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor, e intereses que la cantidad devengue desde la notificación de esta demanda y hasta el pago efectivo y total de la misma, o la suma que el Tribunal estime ajustada a derecho, justicia y equidad, y 2) se condene en costas al demandado.

Funda la demanda, luego de consideraciones generales respecto de las violaciones a los Derechos Humanos perpetrados durante el régimen de facto iniciado en 1973, transcribiendo el relato de su representado, quien señala haber sido empleado de Codelco, dirigente de la Juventud Socialista y dirigente poblacional en la época de la dictadura, en la comuna de Machalí.

En ese contexto político, relata, fue detenido en su domicilio el 29 de septiembre de 1973, en un operativo en que participaron carabineros, militares y funcionarios de investigaciones. Fue sometido al proceso militar Rol 6-73, referido a la Ley 17.798, y condenado por razones políticas, sin poder ejercer su derecho a defensa. Su pena fue conmutada por extrañamiento, por lo que el 18 de enero de 1976 fue



Foja: 1

trasladado al aeropuerto con destino a Francia, y posteriormente a Alemania.

Sostiene que permaneció detenido en el Regimiento de Rancagua entre el 29 de septiembre y el 08 de octubre de 1973, y posteriormente en la cárcel de Rancagua, donde estuvo dos años, para permanecer finalmente cuatro meses en la cárcel Capuchinos de Santiago.

Al llegar al Regimiento de Rancagua, relata, fue aislado durante cinco días y sometido intermitentemente a sesiones de interrogación y tortura, durante las cuales se le aplicó electricidad en brazos y testículos, y se golpeó en todo el cuerpo con elementos contundentes, hasta fracturarle un dedo de la mano derecha, lesionarle el mismo brazo y dejarle cicatrices que perduran hasta la actualidad.

En la cárcel de Rancagua, añade, lo golpeaban permanentemente, lo sacaban a correr desnudo al patio, lo sometían a sesiones de tortura y lo incomunicaban. Recuerda que los apellidos de sus torturadores eran Fajardo, Acevedo, Aravena y Medina.



Foja: 1

Agrega que fue condenado a 24 años de prisión por la Fiscalía Militar, lo que le generó un fuerte estrés, debido a que ignoraba lo que le sucedería; asimismo, producto de la tortura sufrido efectos invalidantes consistentes en falta de movilidad en los dedos y brazo derechos, pues no recibió ayuda médica. Tampoco fue atendido por ningún médico por las consecuencias psicológicas que padece, como estrés postraumático e irritabilidad ante estresores que otras personas puede manejar con mayor facilidad. Pero en su caso eso no pasa, ante estímulos simples, no logra contener mis emociones, sufre de llanto fácil, su estado de ánimo es cambiante y se altera con facilidad. Le cuesta muchísimo desarrollar una vida de manera normal.

En el exilio se vio enfrentado a empezar desde cero, acostumbrarse a otro idioma y vivir en la amargura y el dolor. Pudo regresar a Chile recién en 1993.

Finalmente fue reconocido como víctima de violaciones a los derechos humanos en la Nómina elaborada por la Comisión Nacional sobre Prisión, Política y Tortura, del año 2004, con el N° 3451



Foja: 1

En cuanto al derecho, en los hechos descritos se configuran graves violaciones a los derechos humanos, consistentes en crímenes de lesa humanidad, entre otros, de tortura y persecución. En este caso, se han vulnerado todos aquellos instrumentos de carácter internacional que consagran el derecho a la vida y a la integridad personal, principalmente, los arts. 1, 3 y 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el art. 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; art. 1° de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; los arts. 6, 7 y 8 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todo el contenido de la Convención Contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, los Principios de Núremberg, los Convenios de Ginebra de 1949, la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y, las normas de ius cogens relativas a crímenes internacionales.

En cuanto a la obligación de reparar, afirma que en este caso, son agentes del Estado quienes han realizado las conductas ilícitas. La responsabilidad



Foja: 1

nace al momento de comisión del ilícito atribuible al Estado y, por ello, se hacen aplicables al acto en cuestión todos los criterios internacionales sobre obligaciones del Estado por violación de derechos humanos, dentro de las cuales se encuentra la obligación de reparar el daño causado.

Añade que la obligación de reparar constituye un principio básico del Derecho Internacional, y una norma u obligación primaria, más allá de un *principio general del derecho reconocido por las naciones civilizadas*, en los términos del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, para llegar a ser reconocido como una obligación en el sistema del Derecho Internacional general, por lo cual toda vulneración o violación de un compromiso internacional que haya producido daño hace surgir un deber de repararlo íntegra y adecuadamente, como ha reconocido la jurisprudencia de la Corte Permanente de Justicia Internacional de la Corte Internacional de Justicia, y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Añade que la más precisa configuración de la responsabilidad internacional en el Derecho Internacional público ha sido formulada por la



Foja: 1

Comisión de Derecho Internacional, cuyo objetivo principal consiste en *"impulsar el desarrollo progresivo del Derecho Internacional y su codificación"*, y que en el artículo 1 del Proyecto de Artículos sobre Responsabilidad de los Estados por Hechos Internacionalmente Ilícitos, estableció que todo hecho internacionalmente ilícito de un Estado da lugar a la responsabilidad internacional de éste. En el artículo 2, establece que *"Hay hecho internacionalmente ilícito del Estado cuando un comportamiento consistente en una acción u omisión:*
a) Es atribuible al Estado según el derecho internacional; y b) Constituye una violación de una obligación internacional del Estado".

Indica que esta obligación internacional de los Estados de reparar en caso de incurrir en ilícitos internacionales es un principio general del derecho internacional público, que aparece también en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, reforzado por la primacía de la persona que caracteriza a estas normas. Este carácter especial de los tratados sobre derechos humanos ha sido destacado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, e invoca seguidamente el Principio Pro Homine, el derecho al recurso efectivo y a la



Foja: 1

reparación establecida en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 5 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y Las Libertades Fundamentales y el artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Analiza seguidamente los medios con que cuenta el Estado para librarse de su responsabilidad; satisfacción, la restitución y la indemnización o resarcimiento. Mientras que la satisfacción es la forma adecuada de reparación de los perjuicios no materiales, la restitución (o compensación por equivalencia en su caso) y la indemnización operan esencialmente en el campo de los daños patrimoniales causados. Por lo tanto, el Estado está obligado a resarcir el daño causado.

En cuanto a la relación de programas administrativos y otras medidas de reparación en la definición de las reparaciones dispensadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señala que existe el recurso abusivo y dilatorio que la Defensa Fiscal utiliza con regularidad para tratar de decir, sin fundamento jurídico, que existiría alguna excepción de pago por los gravísimos crímenes cometidos. Al respecto, indica que la Corte ha



Foja: 1

reconocido la contribución de las comisiones de verdad, sin embargo, esta *"verdad histórica"* *"no puede sustituir la obligación del Estado de lograr la verdad a través de los procesos judiciales"*.

Respecto del derecho a reparación de las víctimas, invoca diversas declaraciones órganos de las Naciones Unidas, y el artículo 14 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Degradantes, así como el artículo 75 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

En cuanto a la obligación de reparar en el derecho chileno, sostiene que la responsabilidad del Estado, consagrada en las Actas Constitucionales números 2 y 3, en la Constitución de 1980, y en la actual constitución reformada, reconoce claros antecedentes en la Constitución Política de 1925, vigente a la época de estos actos ilícitos.

Sostiene que el inciso segundo del artículo 38 de la Constitución Política establece una acción constitucional para hacer efectiva la responsabilidad del Estado, cuyo fundamento básico señala estar en el inciso cuarto del artículo 1, en el inciso segundo del artículo 5, y en los artículos



Foja: 1

6 y 7 de la Constitución Política. El mismo sentido tiene el artículo 4 de la Ley 18.575.

En cuanto a la naturaleza de la responsabilidad del estado, afirma que la Excma. Corte Suprema ha sentenciado *que la responsabilidad del Estado por los daños que causan los órganos de su administración enunciada en el artículo 4° de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de esa Administración, es de Derecho Público y de carácter genérico, por emanar de la naturaleza misma de su actividad en el ámbito de las funciones que le corresponde llevar a cabo para los fines que le cometen la Constitución Política y las leyes, para lo cual debe hacer uso de las potestades, medios y acciones materiales conducentes a ellos*, de lo que deduce el demandante que se excluye la aplicación de normas civiles a los casos en que se hace efectiva la responsabilidad del Estado.

Agrega que el estado, motu proprio, ha reconocido su responsabilidad en estos hechos en forma expresa a través del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.

En cuanto al daño sufrido, sostiene que el demandante fue víctima de graves violaciones a los



Foja: 1

derechos humanos, en particular de crímenes de lesa humanidad, por las características con las que fueron llevados a cabo y por el daño causado. Dichos hechos formaron parte de un ataque sistemático y generalizado contra una población civil y sus ejecutores tenían conocimiento de que se estaba llevando adelante dicho ataque.

Añade que la tortura se configura por la concurrencia de tres requisitos: (a) La causación de sufrimiento, acreditado; (b) Por la participación de agentes estatales o para estatales, acreditado y; (c) Que esta sea cometida con determinados fines a saber: Obtener de la víctima o de un tercero información o una confesión, como ocurre en la especie, muchas veces intentando obtener confesiones sobre hechos que sabían falsos; castigar a la víctima o un tercero por un acto que haya cometido o se sospeche que haya cometido. En tal sentido, concluye que todos los hechos objeto de denuncia configuran la tortura en el sentido más exigente. Sostiene que la tortura y los padecimientos físicos dejan secuelas físicas, mentales y psicosomáticas para toda la vida.



Foja: 1

En cuanto a la extensión del derecho a la reparación integral, señala que el término de indemnización es el que cobra relevancia en este caso, pues ésta se divide en indemnización por daño material e indemnización por daño moral, siendo ésta su pretensión de la demanda. El daño moral directo derivado de las siguientes circunstancias que rodearon el hecho fundamental del golpe de Estado: a) amenazas; b) incomunicación; c) persecuciones; d) exoneración laboral; e) negativa de acceso a la información; f) inseguridad; g) presiones y daños psicológicos; h) alteraciones del sueño; i) aislamiento social; j) pérdida de oportunidades, en particular de empleo, educación y prestaciones sociales; k) otras secuelas en el seno de la familia, como separaciones forzosas de largo tiempo; separaciones definitivas, destrucción de la familia, daños que permanecen incólumes pese al transcurso del tiempo.

En definitiva, señala que el derecho a una reparación integral es un derecho reconocido por el derecho internacional y derivado del bloque constitucional de derechos humanos chileno, y que, en tal sentido, al no poder volver las cosas al estado anterior a la vulneración de los derechos,



Foja: 1

queda la opción de repararla. Indica que la legislación interna no puede vulnerar el derecho a una reparación íntegra.

Finalmente concluye que, por concepto de daño moral, para intentar compensar el sufrimiento causado por el secuestro, tortura física y psicológica, represión política y persecución durante la dictadura, por el sufrimiento grave y la angustia que dicha experiencia ha causado a su representado solicita la suma de \$150.000.000, con reajustes e intereses.

Sostiene seguidamente que las acciones que emanan de la comisión de crímenes contra la humanidad son imprescriptibles, al igual que la acción penal, siendo excepción a la institución de la prescripción extintiva. Tal característica no es solo privativa del orden penal, sino que también alcanza a la acción civil que surge de tales ilícitos, pues otorgar reparación civil a las víctimas dota de operatividad a los derechos humanos y da respuesta a la obligación que compete al Estado de reparar de forma integral a los afectados.

Invoca también cita el artículo 29 del Estatuto de la Corte Penal Internacional que señala



Foja: 1

"Los crímenes de la competencia de la Corte no prescribirán", sin distinguir entre acción penal y acción civil, lo cual es reafirmado por el artículo 75 del mismo Estatuto. Por lo tanto, en virtud de un principio sistemático y coherente del ordenamiento jurídico, deduce que la acción para obtener la indemnización de perjuicios derivados de delitos de lesa humanidad no prescribe, inferencia que se condice con dos principios de interpretación; "donde el legislador no distingue, no corresponde al intérprete distinguir" y "a la misma razón, misma disposición", en este sentido, al no distinguirse entre acciones que no prescriben, no corresponde al juez determinar que una acción si prescribe y la otra no.

A folio 10, rola notificación de la demanda, practicada el 28 de abril de 2021.

A folio 11, comparece Ruth Israel López, abogada en representación del Fisco de Chile, quien contestó la demanda, oponiendo como primera cuestión, la **excepción de reparación satisfactiva;** esgrimiendo la improcedencia de la indemnización alegada por haber sido ya indemnizado el actor, exponiendo latamente, el marco general sobre las



Foja: 1

reparaciones otorgadas, agregando que las negociaciones entre el Estado y las víctimas, revelan que tras toda reparación existe una compleja decisión de mover recursos públicos, desde la satisfacción de un tipo de necesidades públicas a la satisfacción de otras, radicadas en grupos humanos más específicos; concurso de intereses que se exhibe normalmente en la diversidad de contenidas que las Comisiones de Verdad o Reconciliación proponen como programas de reparación; programas que incluyen beneficios educacionales, de salud, gestos simbólicos u otras medidas análogas, diversas a la simple entrega de una cantidad de dinero.

Señala que dentro de los objetivos a los cuales se abocó preferentemente la llamada Comisión Verdad y Reconciliación, también llamada "Comisión Rettig", en su Informe Final propuso una serie de "propuestas de reparación", entre las cuales se encontraba una **pensión única de reparación** para los familiares directos de las víctimas, y algunas prestaciones de salud. Dicho informe, sirvió de causa y justificación al proyecto de ley que el Presidente envió al Congreso, que derivaría en la Ley 19.123, que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación; por él se buscaba, en



Foja: 1

términos generales, "**reparar precisamente el daño moral** y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de víctimas", a que se refiere su artículo 18.

Asumida esta "idea reparatoria", tanto la Ley 19.123 y las demás normas conexas, como por ejemplo la Ley 19.992, referida a las víctimas de tortura, han establecido los distintos mecanismos mediante los cuales se ha concretado la compensación, exhibiendo aquella síntesis que explica como nuestro país ha afrontado este complejo proceso de justicia transicional.

Así, se puede indicar que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se ha realizado principalmente a través de tres tipos de compensaciones, a saber: a) reparaciones mediante transferencias directas de dinero; b) reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y c) reparaciones simbólicas.

Afirma que en la especie, el actor ha percibido beneficios pecuniarios al amparo de las Leyes N° 19.234 y N° 19.992 y N° 20.134. La ley 19.992 que estableció una pensión anual de



Foja: 1

reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos individualizados en el anexo "Listado de Prisioneros Políticos y Torturados" de la nómina de personas reconocidas como víctimas; así, se estableció una pensión anual reajutable de \$1.353.798 para beneficiarios menores de 70 años; de \$1.480.284 para beneficiarios de 70 o más años de edad y de \$1.549.422, para beneficiarios mayores de 75 años de edad, haciendo presente además que el actor percibió en forma reciente el aporte único de reparación Ley N°20.874, por **\$1.000.000.-**

Agrega que a los beneficiarios, tanto de la Ley 19.234 como de la Ley 19.992, les fue concedido el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) en servicios de salud del país, agregando que también se les otorgaron beneficios educacionales, consistentes en la continuidad gratuita de estudios básicos, medios o superiores, a través de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación; y asimismo, beneficios en vivienda.



Foja: 1

Finalmente, hace presente las reparaciones simbólicas, mediante actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones; las que pretenden reparar, ya no a través de un pago de dinero paliativo del dolor -siempre discutible en sus virtudes compensatorias- sino precisamente tratando de entregar una satisfacción a esas víctimas que en parte logre reparar el dolor y la tristeza actual y con ello reducir el daño moral.

De lo expuesto, sostiene que puede concluirse que los esfuerzos realizados por el Estado para reparar a las víctimas de DD.HH han cumplido todos los estándares internacionales de Justicia Transicional y han provisto indemnizaciones razonables a nuestra realidad financiera; escenario en el que tanto la indemnización que se solicita en autos, como el cúmulo de reparaciones hasta ahora aludidas, pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos, de lo que resulta concluir que los referidos mecanismos de reparación han compensado precisamente aquellos daños, no pudiendo ser, entonces, reparados nuevamente; citando jurisprudencia relativa a tal situación; motivo por el cual, en definitiva, **opone la**



Foja: 1

excepción de reparación integral, por ya haber sido indemnizado el actor.

En subsidio de la excepción anterior, **opone la prescripción extintiva de la acción**, con arreglo, en primer lugar, a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2497 del mismo texto, solicitando en consecuencia que, por encontrarse prescrita la acción, se rechace la demanda en todas sus partes.

Según el relato efectuado por el demandante, la detención ilegal, privación de libertad y tortura que sufrió aquél, ocurrieron entre el 29 de septiembre de 1973 y hasta el 18 de enero de 1976; entonces, aun entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el **28 de abril de 2021**, ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2332 del Código Civil; motivo por el



Foja: 1

cual opone la excepción de prescripción de 4 años establecida en dicha norma.

En subsidio, y para el caso de que el Tribunal estime que dicha norma no es aplicable, **opone la excepción de prescripción extintiva** de 5 años, contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2515, en relación con el artículo 2514, del ya citado código; debido a que, entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la anotada fecha de notificación de la acción civil de marras, transcurrió también con creces, el plazo pertinente.

Posteriormente, realiza un lato análisis relativo a la prescripción, haciendo presente que no existe norma especial que determine qué plazo de prescripción debe aplicarse en estos casos, por lo que debe recurrirse al derecho común, que en esta materia está representado por la regulación del Código Civil relativa a la responsabilidad extracontractual (artículo 2332); agregando que el plazo debe contarse, en la especie, no desde la detención del demandante, sino que desde que los titulares de la acción indemnizatoria tuvieron conocimiento y contaron con la información necesaria



Foja: 1

y pertinente para hacer valer el derecho al resarcimiento del daño ante los tribunales de justicia; haciendo presente además que numerosa jurisprudencia sobre la materia reiteran tal circunstancia.

Sostiene que la prescripción es una institución universal y de orden público, y que las normas que la consagran, contempladas en el Título XLII del Libro IV del Código Civil, se han estimado siempre de aplicación general a todo el derecho, y no sólo al privado. La imprescriptibilidad es excepcional y requiere una declaración explícita, que en este caso no existe.

Finalmente, sostiene que los ninguno de los instrumentos internacionales contempla la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad o que prohíba o impida la aplicación del derecho interno en la materia; haciendo presente que dichos instrumentos, tales como la "Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad", los "Convenios de Ginebra", la "Resolución N° 3.074, de fecha 3 de Diciembre de 1973, de la Asamblea General de las



Foja: 1

Naciones Unidas", y la "Convención Americana de Derechos Humanos", establecen imprescriptibilidad para las acciones penales.

En subsidio de las defensas planteadas, y en cuanto al daño e indemnización reclamadas, formula las siguientes alegaciones en cuanto a la naturaleza de la indemnización solicitada y del excesivo monto pretendido; señalando que la cifra pretendida en la demanda como compensación del daño moral, resulta excesiva, teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile y los montos promedios fijados por nuestros Tribunales de Justicia, que en esta materia han actuado con mucha prudencia.

En subsidio de las excepciones previas, indica que la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos por el actor de parte del Estado, conforme a las leyes de reparación (N°19.234 y 19.992, sus modificaciones y demás normativa pertinente), y que, por lo demás, "seguirá percibiendo a título de pensión", como también los beneficios extrapatrimoniales que estos cuerpos legales contemplan, pues todos ellos tuvieron por objeto reparar el daño moral y guardar armonía con



Foja: 1

los montos establecidos por los Tribunales; haciendo presente que, de no accederse a tal petición subsidiaria, implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo que contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces.

Seguidamente, alega la improcedencia del pago de reajustes e intereses, por cuanto los reajustes sólo pueden devengarse en el caso de que la sentencia que se dicte en la causa acoja la demanda y establezca la obligación y además desde que la sentencia se encuentra firme o ejecutoriada; y en cuanto a los intereses, señala que conforme al artículo 1551 del Código Civil, el deudor no está en mora sino hasta cuando ha sido judicialmente reconvenido y ha retardado el cumplimiento de la sentencia; cuestión que así ha establecido la jurisprudencia, de manera uniforme; motivos por los cuales los reajustes e intereses, sólo podrán devengarse desde que la sentencia condenatoria se encuentra firme o ejecutoriada y su parte incurra en mora.



Foja: 1

A folio 15, la parte demandante evacuó el trámite de la réplica, señalando que el Fisco no ha controvertido la condición de víctima del actor, ni la existencia del daño.

En cuanto a la **excepción de reparación satisfactiva o integral, o de pago,** opuesta por el demandado, añade a lo ya señalado en la demanda que pretender que una pensión que bordea los \$130.000.-, definida por el propio Estado como "austera y simbólica" es la reparación que mandata el Derecho internacional carece de cualquier asidero, pues la insuficiencia de las reparaciones puede establecerse comparándolas con el ingreso mínimo.

Señala la Ley N° 19.123, que el demandado esgrime como justificación para decir que el daño moral ya está resarcido, en su artículo 2 establece que "*Le corresponderá especialmente a la Corporación (...) Promover la reparación del daño moral de las víctimas*", y observa que la palabra promover no es sinónimo de reparar, y en el caso de su mandante, no se ha reparado íntegramente el daño moral, porque el sentimiento de injusticia y de no haber sido reparada totalmente subsiste intacto. Incluso el tenor literal de la propia Ley N° 19.123, esta no



Foja: 1

considera incompatibles la pensión de sobrevivencia con una eventual indemnización de perjuicios que repare el daño moral, según el tenor inequívoco de su artículo 24: *"La pensión de reparación puede ser compatible con cualquiera otra, de cualquier carácter, de que goce o pudiere corresponder al respectivo beneficiario"*.

Respecto de la **excepción de prescripción extintiva**, agrega que sea cual sea el estatuto de responsabilidad aplicable, es indiscutible la existencia de responsabilidad del Estado, por hechos gravísimos que los particulares afectados no tienen obligación jurídica de soportar. En un Estado de constitucional de Derecho el principio de responsabilidad es parte de la esencia del mismo. La irresponsabilidad por actos del Estado es característica de regímenes absolutos, despóticos o autoritarios. Los daños que causa un Estado, más aún aquellos provocados intencionalmente, son hechos ilícitos que generan responsabilidad, lo cual es un principio del Derecho aceptado por las naciones civilizadas en los términos de la Corte Internacional de Justicia.



Foja: 1

Así, prosigue, la fundamental diferencia entre las reglas de la prescripción extintiva del Código Civil que buscan sancionar al acreedor negligente, o el régimen normativo aplicable a la reparación de daños causados por animales fieros, por remover las losas de una acequia, por personas ebrias u objetos que caen de la parte superior de un edificio. A este efecto, reitera lo expuesto por el Magistrado de la Corte Interamericana E. Raúl Zaffaroni: *"La prescripción civil se invoca sólo en función de la seguridad de los negocios y de la propiedad, pero lo grave es que muchas veces la propiedad cuya seguridad se invoca es ella misma efecto del crimen cometido (...). Invocar la simple prescripción civil para negar cualquier derecho de reparación o de restitución en caso de crímenes contra la humanidad no es una mera cuestión de neutralización del reclamo, sino un verdadero escándalo jurídico" (...)"*.

En cuanto al monto demandado, afirma que resulta difícil avaluar daños de naturaleza no patrimonial, pero que la normativa exige formular peticiones concretas. Añade que se pidió en subsidio que se condene a la suma que el Tribunal estime ajustada a derecho, justicia y equidad.



Foja: 1

Respecto de los reajustes, sostiene que, siendo el juez de la instancia quien determina la cuantía, procede que estas sean reajustadas desde la dictación del fallo de primera instancia, momento en que queda fijada la pretensión y, en cuanto a los intereses, afirma que existe una tendencia jurisprudencial asentada en que para dar cumplimiento al principio de la reparación integral, es menester que a la víctima no solo se le concedan reajustes sobre las sumas fijadas como indemnización, sino además intereses.

A folio 17, la demandada evacúa la réplica reiterando su argumentación anterior.

Respecto de la excepción de **reparación integral**, sostiene que la Ley 19.922 tuvo una finalidad reparatoria, porque de otro modo no se justifica el pago que se otorga a determinadas personas calificadas como víctimas de prisión política y tortura, es un mecanismo indemnizatorio especial que el estado asumió voluntariamente, por lo que es excluyente con otras indemnizaciones, tanto porque sus beneficios son renunciables, como por cuanto la Ley sólo lo hace compatible con otras pensiones.



Foja: 1

Agrega que en cuanto a que reparar no significa indemnizar no es un argumento sólido, pues al pagarse dinero se confirió una indemnización que fue aceptada por el actor. Asimismo, debe tenerse en consideración que el estado en su conjunto hace un esfuerzo para otorgar no sólo una pensión, sino que además consagra otros beneficios sociales de salud y de apoyos técnicos y de rehabilitación para la superación de lesiones surgidas a consecuencia de la prisión política o la tortura. Asimismo, se concedieron beneficios educacionales que representan un importante costo para el estado, por lo que el demandante se encuentra en una posición especial, pues los beneficios compensatorios y su pensión vitalicia no son meramente asistenciales, porque existen otras pensiones de esa naturaleza, cuya finalidad es asistir a personas que se encuentra en la indigencia, que no es el caso del demandante.

Añade que por lo anterior no es pertinente la alegación de que la indemnización sólo puede ser determinada por un Tribunal, pues nada obsta a que quien quiere reparar como el afectado por el hecho puedan convenir una reparación del daño moral, el primero, ofreciendo una suma o pensión vitalicia y el otro aceptando dicho ofrecimiento.



Foja: 1

En cuanto a la **excepción de prescripción**, se refiere a la jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema que concluye que las acciones por responsabilidad extracontractual en contra del Estado prescriben en el plazo de 4 años desde la perpetración de los hechos, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.332 del Código Civil, norma cuya aplicación está regulada en el artículo 2.497 del mismo Código, que señala que las normas de prescripción se aplican a favor y en contra del estado. Asimismo, su jurisprudencia ha establecido que los tratados internacionales sobre derechos humanos no impiden en modo alguno la aplicación del derecho interno, específicamente las normas sobre prescripción de la acción civil.

A folio 18 se recibió la causa a prueba.

A folio 66 se citó a las partes a oír sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, como se dijo, **Cynthia Alejandra Martinic Jara**, abogada, en representación judicial de **ALBERTO RAMÓN BRIONES GUERRERO**, deduciendo demanda en juicio ordinario de indemnización de perjuicios por responsabilidad



Foja: 1

extracontractual, en contra del **FISCO DE CHILE**, representado legalmente por **Juan Antonio Peribonio Poduje**, en su calidad de Presidente del **Consejo de Defensa del Estado**, ambos domiciliados en calle Agustinas N°1687, comuna de Santiago, solicitando que: 1) se condene al Estado de Chile a pagar al demandante a título de indemnización de perjuicios por el daño moral sufrido causado por los crímenes perpetrados en su contra, la suma de \$150.000.000.- (ciento cincuenta millones de pesos), más reajustes de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor, e intereses que la cantidad devengue desde la notificación de esta demanda y hasta el pago efectivo y total de la misma, o la suma que el Tribunal estime ajustada a derecho, justicia y equidad, y 2) se condene en costas al demandado.

Funda su pretensión en los argumentos ya explicitados en la expositiva, que por economía procesal, se tienen por reproducidos para todo efecto legal.

SEGUNDO: Que, notificado el demanda, contestó la demanda y se evacuaron los trámites de réplica y dúplica, conforme las alegaciones y defensas debidamente reseñadas en la expositiva, que



Foja: 1

por economía procesal, se tienen por reproducidos para todo efecto legal.

TERCERO: Que, a objeto de acreditar sus alegaciones, la parte demandante se valió de los siguientes medios probatorios:

- DOCUMENTAL:

A folio 34:

1. Copia de Carpeta de Antecedentes de la demandante entregada ante la Comisión Valech I.

2. Copia de informe psicológico realizado a Alberto Ramón Briones Guerrero, por el facultativo Cristian Solar Valenzuela, Psicólogo clínico de la Universidad Diego Portales, de fecha 4 agosto de 2021.

3. Certificado del Instituto Nacional de Derechos Humanos que da cuenta de que Alberto Briones Guerrero se encuentra calificado como víctima en el listado de prisioneros políticos y torturados, elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, con copia de página 575 de la nómina, en la que se observa el nombre del actor con el número **3451**.



Foja: 1

CUARTO: Que, el demandado solo rinde como probanza oficio respuesta del Instituto de Previsión Social **N°4792/1819**, rolante a **folio 58**, que da cuenta que el demandante ha recibido, a junio de 2021, la cantidad \$30.524.712.- por concepto de Pensión Ley 19.234, \$1.000.000.- por Aporte Único Ley 20.874, y \$518.325.- por concepto de aguinaldos, lo que totaliza **\$32.043.037.-**. Su pensión actual es de \$212.919.-.

QUINTO: Que, son hechos de la causa, por no haber sido objeto de controversia, que se encuentran además acreditados con el mérito del documento reseñado en el motivo anterior, los siguientes:

1. Que el actor tiene la calidad de "Víctima de Prisión Política y Tortura", conforme al Informe Valech;

2. Que a junio de 2021, la cantidad \$30.524.712.- por concepto de Pensión Ley 19.234, \$1.000.000.- por Aporte Único Ley 20.874, y \$518.325.- por concepto de aguinaldos, lo que totaliza **\$32.043.037.-**. Su pensión actual es de \$212.919.-.

SEXTO: Que, el 11 de noviembre de 2003, transcurridos **13 años** desde que se restableció el



Foja: 1

Estado de Derecho en nuestro país, durante el gobierno del Ex Presidente, S.E Ricardo Lagos Escobar, se dictó el Decreto N° 1040, mediante el cual se creó la "Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, para el Esclarecimiento de la Verdad acerca de las Violaciones de Derechos Humanos en Chile", cuyo objetivo, de acuerdo a las palabras del propio gestor, fue determinar el universo de las personas que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas, entre Septiembre de 1973 y Marzo de 1990; que se materializó en un Informe que consta de más de 500 páginas, elaborado con 28.000 testimonios de considerados válidos (se recibió testimonio de 35.865 personas, residentes en Chile como en el extranjero); de los que, con la debida prudencia y cautela, se deja constancia en el mismo informe, sin individualizar nombres ni algún otro dato personal, sino únicamente el sexo del declarante, y el lugar en que fue detenido.

Conjuntamente con el informe, la Comisión elaboró un listado con los nombres de las personas a quienes se les reconoció la calidad de Presos Políticos y Torturados, con un total de **27.153** personas.



Foja: 1

SÉPTIMO: Que, posteriormente, y con ocasión del resultado de la labor de la Comisión, fue dictada la Ley N° 19.992, publicada con fecha 24 de Diciembre de 2004, que "Establece Pensión de Reparación y Otorga otros Beneficios a Favor de las Personas que indica", cuyo artículo primero, contenido en el Título I "De la pensión de reparación y bono", dispone: *"Establécese una pensión anual de reparación en beneficio de las víctimas directamente afectadas por violaciones a los derechos humanos individualizadas en el anexo "Listado de Prisioneros Políticos y Torturados", de la Nómina de personas reconocidas como Víctimas, que forma parte del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada por el decreto supremo N° 1.040, de 2003, del Ministerio del Interior."*

El artículo segundo, establece que la pensión anual aludida, ascendería a **\$1.353.798.-**, para aquellos beneficiarios menores de 70 años de edad; a **\$1.480.284** para aquellos beneficiarios mayores de 70 o más años pero menores de 75 años; y a **\$1.549.422**, para aquellos beneficiarios de 75 o más años de edad; pensión que se pagaría en 12 cuotas mensuales de igual monto, reajutable conforme lo



Foja: 1

dispuesto en el artículo 14 del Decreto Ley N° 2.448, de 1979, o en las normas legales que reemplacen dicha disposición.

Su inciso segundo, establece que la pensión referida, sería incompatible con aquellas otorgadas en las leyes números 19.234, 19.582 y 19.881, pudiendo quiénes se encuentren en tal situación optar por uno de estos beneficios en la forma que determine el Reglamento; precisando que las personas que ejercieran dicha opción, tendrían derecho a un bono de \$3.000.000.-, el que se pagaría por una sola vez dentro del mes subsiguiente de ejercida la opción.

El artículo séptimo, dispone que tanto la pensión como el bono establecidos, se devengarían a partir del primer día del mes subsiguiente a la fecha en que los beneficiarios presenten sus solicitudes, las que podrían ser solicitadas desde la publicación de la misma (ley).

OCTAVO: Que, por otro lado, mediante la Ley N° **20.874**, publicada con fecha 29 de Octubre de 2015, que "Otorga un aporte único, de carácter reparatorio, a las víctimas de prisión política y tortura, reconocidas por el Estado de Chile", de



Foja: 1

acuerdo a su artículo primero, se otorgó un aporte único en carácter de reparación parcial, de **\$1.000.000.-**, a los titulares individualizados en la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, y a los titulares incluidos en la nómina de víctimas de prisión política y tortura elaborada por la Comisión asesora para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y víctimas de Prisión Política y Tortura, conforme a las leyes N° 19.992 y N° 20.405, respectivamente.

El inciso tercero, dispone que: *"Con todo, el aporte a que se refiere este artículo será imputable al monto que, en su caso, se otorgue por concepto de reparación pecuniaria a cada víctima de prisión política y tortura."*

NOVENO: Que, tal como consta del documento reseñado en el motivo quinto, el actor, **Alberto Ramón Briones Guerrero**, Rut: 5.239.260-8, tiene la calidad de "Preso Político y Torturado", constando en autos que percibe en virtud de tal calidad, al mes de junio de 2021, la suma de \$1.000.000.-, por concepto de aporte único establecido por la Ley N° 20.874, y



Foja: 1

asimismo fue beneficiario de la Ley N° 19.992 concepto por el que recibió la cantidad de \$30.524.712.-, y aguinaldos por la suma \$518.325.-, totalizando **\$32.043.037.-**, y que percibe actualmente una pensión de \$212.919.-

DÉCIMO: Que la excepción de pago (reparación integral) opuesta por el Fisco de Chile se ha fundado, como ya se dijo, en que el actor ya ha sido indemnizado, en razón de haber recibido beneficios pecuniarios al amparo de la Ley N° 19.992 y sus modificaciones; resultando en consecuencia improcedente ser indemnizado por daños cuya génesis radica en idénticos hechos.

DÉCIMO PRIMERO: Que, al respecto, cabe aplicar los argumentos esgrimidos por la Excma. Corte Suprema, en orden a que el hecho de reconocer el Estado la condición de "Preso Político y Torturado" constituye un acto unilateral, y sus efectos, como en la especie lo es el pago de la pensión a las víctimas, no resulta posible entenderlos como una "indemnización", como pretende el Fisco al sostener su excepción de pago o reparación integral, ya que, de aceptarse tal circunstancia, daría lugar a entender que lo que el Estado de Chile pretendió al



Foja: 1

crear la "Comisión Valech" fue, con el mérito de sus resultados, en estricto rigor, efectuar una "transacción" con cada uno de los beneficiados, para así precaver la interposición de una acción como la de marras; cuestión que no aparece del tenor literal de la ley, ni tampoco de su espíritu, toda vez que en ella se establece que la pensión sería incompatible con aquellas otorgadas en las leyes números 19.234, 19.582 y 19.881, pudiendo quienes se encontraren en tal situación optar por uno de dichos beneficios en la forma que determine el Reglamento; situación de la que resulta entonces concluir que, no obstante ser el actor beneficiario de la pensión otorgada por el Estado, en su condición de "preso político torturado", tal hecho no era óbice para que interpusiera la acción civil pertinente, como lo ha hecho mediante la demanda de marras; motivos todos los cuales conducen a **desestimar la excepción de pago (reparación integral) opuesta por el Fisco.**

DECIMOSEGUNDO: Que, en subsidio de la excepción razonada previamente, el demandado opuso la excepción de prescripción de la acción, fundado en los argumentos ya explicitados en el presente fallo.



Foja: 1

Ante tal alegación, cabe tener presente que, fluye del artículo quinto de nuestra Constitución, el ejercicio de la soberanía se realiza por el pueblo a través del plebiscito y también, se realiza por las autoridades que la misma Carta establece.

Dicho ejercicio, reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana; y es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por la Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Dicha disposición constitucional, hace posible incorporar al derecho nacional las obligaciones contempladas en los instrumentos internacionales, tales como la de indemnizar íntegramente los daños cometidos por violaciones de los derechos humanos; que, en consecuencia, adquiere rango constitucional.

DECIMOTERCERO: Que, la Excma. Corte Suprema, en los autos Rol **22.856-2015**, de fecha 29 de Diciembre de 2015, ha señalado que, "*tratándose de un delito de lesa humanidad -lo que ha sido declarado en la especie-, cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta*



Foja: 1

coherente entender que la correlativa acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción contempladas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional, en armonía con el inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental, que instaaura el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, e incluso por el propio derecho interno, que, en virtud de la ley N° 19.123, reconoció en forma explícita la innegable existencia de los daños y concedió también a los familiares de aquellos calificados como detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, por violación a los derechos humanos en el período 1973-1990, regalías de carácter económico o pecuniario. En esta línea discurren también SCS Nros. 20.288-14, de 13 de abril de 2105; 1.424, de 1 de abril de 2014; 22.652, de 31 de marzo de 2015, entre otras.

Por ende, cualquier pretendida diferenciación en orden a dividir ambas acciones y otorgarles un tratamiento desigual resulta



Foja: 1

discriminatoria y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad indispensables en un Estado de derecho democrático. Entonces, pretender el empleo de las disposiciones del Código Civil en la responsabilidad derivada de crímenes de lesa humanidad posibles de cometer con la activa colaboración del Estado, como derecho común supletorio a todo el régimen jurídico, hoy resulta improcedente.

Por lo demás, la reparación integral del menoscabo no se discute en el plano internacional, ni se circunscribe a los autores de los crímenes exclusivamente, sino también se prolonga hacia el mismo Estado. La preceptiva internacional no ha creado un sistema de responsabilidad, lo ha reconocido, desde que, sin duda, siempre ha existido, con evolución de las herramientas destinadas a hacer más expedita, simple y eficaz su declaración, en atención a la naturaleza de la violación y del derecho violentado."

Por todo lo expuesto, la excepción de prescripción será desestimada; misma suerte que correrá la excepción de prescripción subsidiaria, por encontrar ésta, de igual manera, su fundamento



Foja: 1

en normas de derecho interno, que, como ya es claro, no son aplicables al caso de autos.

DECIMO CUARTO: Que, habiéndose desestimado la prescripción de la acción civil, cabe ahora pronunciarse sobre la procedencia de la indemnización pretendida.

Como ya se encuentra acreditado, y sin ánimo de agotar el asunto, el actor detenta, la condición de "Preso Político y Torturado", detención que es del todo plausible sostener, se debió al hecho de haber sido militante de la Juventud Socialista y Dirigente Poblacional.

Siendo tales circunstancias aquellas que motivaron la detención y posterior tortura, física y psicológica; es pertinente señalar que los actos ejercidos por agentes del estado en su persona, debieron necesariamente afectar su estado emocional, de manera inmediata y durante todo el período en que estuvo detenido, como también en los tiempos futuros.

Por lo expuesto, se concluye que dicha situación produjo en el actor daños que es necesario reparar por cuanto es deber del Estado respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la



Foja: 1

naturaleza humana como son la integridad física y psíquica, no siendo posible tolerar que en la especie los agentes del Estado actuaran de manera reprochable y contrarios a los derechos que tanto la legislación interna como internacional protegen, por lo que el Estado debe responder por ello.

DECIMOQUINTO: Que, con la documental rendida por la parte demandante y no objetada por causal legal, en su oportunidad, se puede establecer que está reconocida su calidad de "Preso Político y Torturado" (Nómina de personas reconocidas como víctimas, del informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, en donde el demandante ocupa el lugar **N°3451**, y que, no habiendo sido desconocidos por la demandada las torturas que el actor refiere haber sufrido durante su cautiverio, es posible concluir que una persona que es violentada física y psicológicamente, como en el caso de autos, sufre perjuicios, daño emocional y secuelas tanto físicas como psicológicas que perduran hasta la actualidad y que deben ser reparados, situación que corresponde a la consecuencia normal de la detención, prisión, tortura y exilio sufridos por el actor.



Foja: 1

DECIMOSEXTO: Que, encontrándose acreditado el hecho que el actor, debido a la detención, prisión y torturas que experimentó y repercuten hasta la actualidad, un daño que sólo se puede enmarcar dentro de aquél denominado "moral", y que el demandado no justificó, los montos que percibe o ha percibido el demandado en su calidad de "Preso Político y Torturado", lo que sin perjuicio, hace igualmente plausible acoger la demanda, condenándose al Fisco de Chile, a pagar al actor la suma única y total de **\$ 50.000.000.- (cincuenta millones de pesos)** suma que se estima justa y equitativa, considerando que dicha parte es beneficiario de las leyes de reparación respectivas ya indicadas, lo que no es óbice para acoger la acción indemnizatoria por el daño sufrido de manos de agentes del Estado.

El monto indemnizatorio fijado previamente, deberá pagarse debidamente reajustado entre la fecha del presente fallo y aquella en que se haga el pago total y efectivo; más los intereses corrientes para operaciones de crédito de dinero no reajustables, devengados durante el mismo período.

Por estas consideraciones, y visto además, lo dispuesto en los artículos 144, 160, 170, 254, 748 y



C-2900-2021

Foja: 1

siguientes del Código de Procedimiento Civil; el Decreto 1040, de 26 de Septiembre de 2003, la Ley 19.992 y la Ley 20.874;

SE DECLARA:

1.- Que **se rechazan** las excepciones opuestas por el demandado;

2.- Que **se acoge** la demanda intentada **a folio 1**, y se condena al Fisco de Chile a pagar al actor, **Alberto Ramón Briones Guerrero**, la cantidad de **\$ 50.000.000.-** en la forma señalada en el motivo final, del considerando décimo sexto.

3.- Que, se condena en costas al demandado.

Regístrese y notifíquese, y elévese en consulta si no se apelare.

ROL C-2.900-2021

Dictada por Wilson Rodríguez Rodríguez, Juez Suplente del Primer Juzgado Civil de Santiago.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, veintidós de Abril de dos mil veintidós**



